

Tema del fuero constitucional no fue concretado: Henao

El exmagistrado y académico, que hizo parte del equipo del Gobierno en la discusión del acuerdo de justicia en La Habana, asegura que el sistema 'será un modelo para el mundo'.

El catedrático y exmagistrado Juan Carlos Henao, que con el también expresidente de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda fueron los 'arquitectos' del modelo de justicia transicional, dice que lo acordado con las Farc cumple las exigencias de la Corte Penal Internacional. Y sobre todo, llama a reconocer un objetivo nacional: "Mucho de lo que sigue en el proceso debe ser de sentido común. No ahoguemos desde el inicio la oportunidad de la paz; juguemos a una presunción de que la paz va a funcionar".

A lo largo de este proceso y otros procesos de paz ha rondado siempre el 'coco' de la Corte Penal Internacional. ¿Este modelo de Justicia para la Paz dejará satisfecha a la Fiscalía de la CPI?

Este fue uno de los temas más discutidos. Ese 'coco' lo tuvimos siempre presente. Consideramos como punto de partida que la no impunidad no es el fin último de cárcel o de prisión con barrotes. Ese es el eje central del modelo, que el sistema internacional lo permite gracias a adaptaciones que puede haber en los sistemas nacionales con respecto a los tratados internacionales. Lo que diría yo es que este sistema no tiene impunidad porque toda conducta de crimen de guerra, que son los que normalmente juzga la CPI junto con los delitos de lesa humanidad, va a estar sancionada por el aparato judicial.

¿Cuál es el alcance de una pena no privativa de la libertad y de la restricción de movilidad que plantea el acuerdo?

Hay que entender la base del sistema: entre más verdad, menos sanción, porque se busca satisfacer la ver-

dad de las víctimas, que cada una de ellas sepa qué pasó con su familiar desaparecido, torturado o lesionado de cualquier manera. Habrá los carriles: el carril para los que dicen la verdad y el carril para los que no lo hacen. Para los que dicen la verdad habrá sanción restrictiva de la libertad, bien en domicilio o de movimiento. Los segundos, los que no dicen la verdad, van a juicio en el Tribunal.

¿Cómo sería la sanción de restricción de movimiento?

El Tribunal tiene que preestablecer, como lo hace cualquier juez de la República, el alcance. Va a tener que decir: mire, en este caso, no va a poder salir de tal casa; o en otros casos, no puede salir de tal vereda o tal región, e imponer la obligación de hacer determinadas cosas. Habrá un comité de seguimiento del cumplimiento de las sanciones, tanto las restrictivas como las restauradoras, con componente nacional e internacional. Y hay un catálogo de sanciones que se está puliendo en la mesa de diálogo.

¿No habrá cárceles o colonias agrícolas?

La prisión no está contemplada para la gente que dice la verdad. Está contemplada para la gente que no dice la verdad, porque lo que se buscaba era crear un estímulo de eficiencia respecto de la verdad para el sistema. Y esa verdad que va a ofrecer la persona va a ser obligatoriamente contrastada con todo el trabajo que han hecho la Fiscalía y las asociaciones de víctimas.

¿En el acuerdo se establece la obligación de entregar los bienes ilegales para la reparación?

Eso no quedó en este acuerdo, porque hay otra agenda, la de reparación, liderada por la Unidad de Víctimas. Lo que sí le pue-

do decir como profesor de teoría del daño es que cualquier bien que se incaute a la guerrilla en sí mismo es de origen ilícito y, por tanto, sería para las víctimas.

Otro tema álgido es el de los civiles juzgados por el Tribunal. ¿Las personas con fuero constitucional, por ejemplo, quedan en su órbita?

Realmente fuero no se estableció en ninguna parte en el sistema. Ese tema no se expresó, no quedó concreto en el documento. Ya

será un problema de interpretación, pero el principio es que no hay personas que estén por fuera del sistema.

¿El Tribunal podrá conocer hechos cometidos en qué periodo?

Su competencia es sobre todo el conflicto armado. Y también abarca casos ya fallados, que podrían ser revisados por el Tribunal. Esa revisión podría ser por iniciativa de cualquier persona condenada, porque un punto clave es que este sistema no es solo para la gue-

rrilla, sino para todos los actores del conflicto. De suerte que, si los militares quieren acogerse, pueden hacerlo sin ningún problema.

¿Si un militar que está condenado pide revisar su sentencia, tendría necesariamente que confesar o el tribunal evalúa las pruebas de oficio?

Para ingresar al sistema, el punto de partida es el reconocimiento de la verdad. Pero el sistema también puede, en determinado momento, hacerlo de oficio, es decir, quedó una vía amplia para que eso ocurra. Puedo decir que el Tribunal quedó con facultad de revisar sentencias de otras jurisdicciones.

¿Esto no supone un choque de trenes?

No, porque se debe partir de un enunciado general y obvio, que es que estamos en un sistema de justicia transicional, y precisamente este sistema supone excepciones a la forma de marchar ordinariamente la justicia. Este modelo va a ser ejemplo en el mundo,

prevé tribunales, prevé magistrados, una cantidad de elementos que, sin lugar a dudas, permite decir que este no es un sistema extrajudicial sino judicial.

¿Cómo será la logística?

Estamos hablando de 20 magistrados colombianos (en el Tribunal), pero con una posibilidad de que haya una adición de un 20 o 25 por ciento de extranjeros. Por ahora no hay sistema de selección, pero deben tener las mismas calidades de ser magistrados de las altas cortes en Colombia: juristas de más alto nombre científico, jurídico, ético. La forma en la que se va a elegir ese tribunal es algo que va a depender, entre otras cosas, de la forma como vayan avanzando las negociaciones de aquí a marzo, al igual que la definición específica del área de restricción de movimiento para los sancionados. Habrá varias salas, como la de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos, que es donde va a empezar todo el sistema, donde la gente va a decir su verdad y donde se le va a confrontar. El Tribunal tendrá salas de amnistía o indulto, porque toda conducta que sea amnistiable va a ser revisada, a pesar de vaya a haber una ley que precise los delitos amnistiables.

¿Será tribunal de cierre?

Sí, y con una cosa juzgada absoluta. No hay nada que valga frente a sus decisiones. Es decir, después de que hay sentencia del Tribunal, hasta ahí llegamos. Este tribunal es el órgano de cierre y no hay ningún recurso que pueda atacar esa decisión.

¿El tribunal va a decidir sobre extradiciones?

Eso es tema de extradición van a tener un escenario en la sala de definición de situaciones jurídicas, sala que va a estudiar, por ejemplo, si la conducta de alguien tiene relación o no con el conflicto armado, para impedir que se euelen narcotraficantes. La lógica general es que, en principio, la extradición no opera para cualquier persona que ingresa al sistema, porque aquí lo importante es que la negociación va a generar un cambio, el paso de un movimiento de armas a un movimiento electoral. Esto supone garantías de que quien lo haga no va a ser extraditado. Pero eso debe ser decidido tanto por el Tribunal como por el Gobierno; el Gobierno queda con la facultad, como hoy, de decir: no extradito.

2 o 3 años de vigencia

INICIALMENTE EL SISTEMA RECIBIRÁ A 6.000 DE LAS FARC

¿Tiene vigencia definida este nuevo sistema?

Una vez tenga la normatividad vigente y los recursos para entrar a operar, se trabaja al día siguiente. Creemos que no serán más de tres años.

¿Cuánta gente terminará bajo la órbita del tribunal?

Eso va a depender mucho del ingreso de los militares; en lo que tiene que ver con la guerrilla, nosotros

creemos que fácilmente unas 6.000 personas.

¿No es una cifra muy grande?

No es muy grande, porque va a haber muchos, como los procesados por rebelión, que saldrán casi automáticamente del sistema. Y después va a haber unos sistemas de depuración (de los 'máximos responsables') que evitará un colapso de la justicia.



El exmagistrado Juan Carlos Henao es el rector de la Universidad Externado de Colombia. Archivado EL TIEMPO

Militares presos evalúan buscar beneficios en el nuevo modelo de justicia

En las últimas 36 horas no han dejado de sonar los teléfonos de reconocidos abogados que defienden a militares y policías enredados en procesos penales. Sus clientes les están preguntando cuáles serían los alcances de la nueva justicia transicional acordada entre el Gobierno y las Farc en la mesa de diálogos de La Habana.

"Varios clientes ya manifestaron su interés en saber qué tipo de beneficios tendrían con los acuerdos de paz y qué posibilidades hay de reducir sus condenas", señaló un abogado que habló con EL TIEMPO.

"Lo que les hemos dicho es que esperen a que esos beneficios sean un hecho jurídico real y que, mientras tanto, se mantengan en la justicia ordinaria", indicó otro defensor tras señalar que



Por la retoma del Palacio de Justicia, en 1985, han sido condenados el coronel Alfonso Plazas Vega y el general Jesús Armando Arias.

"es normal que una persona civil o uniformada vea con esperanza la posibilidad de recuperar su libertad".

Si bien ya hay oficiales que están presos hace varios años y que contemplan la posibilidad, hay una línea dura de condenados que ya rechazaron los eventuales beneficios, bajo el entendido que les supondría reconocer

fuerzas por considerar acogerse a la nueva jurisdicción -dijo otro jurista-, pero es un hecho claro que si se abre esa puerta muchos van a entrar por ella para contribuir con la verdad y la reparación".

El acuerdo no. 4 del proceso de paz con las Farc señala que en el nuevo modelo de justicia tendrán cabida no solo los miembros de la guerrilla sino los agentes del Estado y los civiles que hayan cometido conductas criminales relacionadas con el conflicto armado.

El nuevo Tribunal para la Paz, que entrará en vigencia siempre y cuando se firme la paz con la guerrilla, tiene facultades para reabrir casos ya juzgados por la justicia ordinaria colombiana, siempre y cuando se cumplan presupuestos de reconocimiento de responsabilidad y restauración de las víctimas.

En este momento hay dos generales condenados por hechos del conflicto. Jaime Humberto Uscátegui fue sentenciado a 37 años de cárcel por omisión en la masacre de Mapiripán (Meta), cometida por paramilitares en 1997. Y el general Jesús Armando Arias Cabrales paga 35 años por el caso del Palacio de Justicia.

Narcotráfico sí es delito conexo a la rebelión, dice la Corte Suprema

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la conexidad del delito de narcotráfico con el de rebelión.

Polémica cotráfico con el de rebelión, siempre y cuando esa actividad ilegal haya sido cometida para financiar a grupos insurgentes.

Pese a que dijo que son delitos conexos, para la Sala esto no representa un obstáculo para que se extradite a los integrantes de grupos al margen de la ley que sean requeridos por esta conducta.

La Corte tuvo en cuenta estos argumentos al emitir un concepto favorable para extraditar a Juan Vicente Carvajal Isidro, alias Misael. "Carvajal fungió como jefe financiero del frente 10 de las Farc, y recolectó en su nombre pagos conocidos como 'impuestos' a los productores de cocaína que se encontraban en áreas

controladas por ese grupo. Ello evidencia la conexidad del tráfico de estupefacientes con la rebelión", dice la Corte.

Sin embargo, la relación entre estos delitos, "de ninguna manera puede considerarse un factor que impida una solicitud de extradición, porque la misma comunidad internacional le niega ese carácter". Así ha sido ratificado por la Convención de las Naciones Unidas sobre tráfico ilícito de drogas.

La semana pasada el presidente de la Corte Suprema, José Leonidas Bustos, dijo en un conversatorio en la Fiscalía que el narcotráfico puede ser objeto de amnistías e indultos. "En el marco de la justicia transicional puede ser conexo al delito político cuando sirva como instrumento para la guerra". Esa posición fue duramente criticada por el Procurador General.